



SENTENCIA

PROCESO	Ordinario laboral
DEMANDANTE	María Gladys Henao García
DEMANDADO	Colpensiones – Grupo Eléctrico SA
RADICADO	05 001 31 05 010 2017 01029 01
TEMA	Pensión de vejez – Relación Laboral
DECISIÓN	Modifica y confirma sentencia

Medellín, cuatro (4) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

En la fecha anunciada, la Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por las demandadas en el proceso de la referencia, además del grado jurisdiccional de consulta a favor de Colpensiones. La Sala, previa deliberación, adopta el proyecto presentado por el magistrado ponente, que se traduce en la siguiente sentencia.

Pretensiones

La demandante solicitó que se declare que laboró para la sociedad Grupo Eléctrico, entre el 22 de enero de 1986 y el 15 de septiembre de 2008, de acuerdo con la certificación emitida por el revisor fiscal, y en consecuencia, que se valide el tiempo comprendido entre el 24 de enero de 1989 y el 15 de septiembre de 2008, a efectos del reconocimiento de su pensión.

Igualmente, que se declare que la sociedad demandada no cumplió con la obligación de realizar aportes para la seguridad social en pensiones desde el 1.º de febrero de 2000 hasta el 15 de septiembre de 2008, fecha en la cual terminó la relación laboral, y efectuó cotizaciones de manera interrumpida; que el ISS faltó a su deber legal de iniciar las acciones de cobro coactivo correspondientes, por los periodos dejados de cotizar a su favor; que al ISS se le brindaron todas las garantías legales para

que hiciera efectivo el pago de aportes a pensión de los trabajadores de Grupo Eléctrico SA, ya que para su caso concreto, en el año 2002 fue convocado al proceso de acuerdo de restructuración de la Ley 550 de 1999 y en el año 2008, fue convocado al proceso de liquidación judicial, procesos tramitados ante la Superintendencia de Sociedades.

Que se declare que ha sido diligente en la reclamación de los aportes para pensión que le hacen falta en su historia laboral, ya fue por sus gestiones que incluyeron nuevamente al ISS en el proceso de liquidación judicial, y que en el año 2016, por su solicitud requirieron a Colpensiones para que hiciera efectivo el pago que le correspondió a dicha entidad en el proceso de liquidación judicial.

Que en consecuencia, se condene a Colpensiones a incluir en su historia todos los ciclos de cotización faltantes en el periodo comprendido entre el 1.º de febrero de 2000 y el 15 de septiembre de 2008 por el empleador Grupo Eléctrico SA; que se reconozca que es beneficiaria de régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993; al reconocimiento y pago de la pensión de vejez de conformidad la norma anterior que le sea más favorable; el retroactivo pensional desde el 14 de agosto de 2010, fecha en la cual acreditó los requisitos para acceder a la pensión de vejez; los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y las costas procesales.

Hechos

Como supuestos fácticos relató que nació el 14 de agosto de 1955, cumpliendo 55 años en el año 2010; que laboró 1351,3 semanas en toda su vida laboral para empleadores públicos y privados.

Respecto al empleador Grupo Eléctrico SA, precisó que los extremos de la relación laboral están determinados de acuerdo a la certificación emitida por el revisor fiscal de la empresa, donde manifestó que laboró en el cargo de gerente administrativo desde el 22 de enero de 1986 hasta el 15 de septiembre de 2008; que solo se le cancelaron salarios hasta diciembre de 2000; que no se le cancelaron cesantías ni sus

intereses y que desde el año 2000, no se efectuaron los aportes a pensión; que su afiliación al ISS por la sociedad demandada la realizó el 24 de enero de 1989, es decir, 3 años después de iniciada la relación laboral; que nunca realizó reclamación al empleador ni inició proceso judicial para el reconocimiento de los aportes para pensión por el periodo comprendido entre el 22 de enero de 1986 y el 23 de enero de 1989, motivo por el cual el pago de esos aportes no fue discutido en el proceso de estructuración ni en el de liquidación judicial tramitados ante la Superintendencia de Sociedades.

Afirmó que los periodos que deben ser valorados para el estudio del cumplimiento de los requisitos para la pensión de vejez son:

EMPRESA	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	DÍAS LABORADOS	SEMANAS LABORADAS
ESE Hospital San Vicente de Paul	01/11/1982	13/05/1984	553	79
Dirección Seccional de Salud de Antioquia	14/05/1984	16/01/1985	243	34,7
Grupo Eléctrico SA	24/01/1989	15/09/2008	7041	1010,6
Independiente	01/07/2011	31/10/2013	510	72,8
			8377	1196,6

Sostuvo que en su historia laboral se evidencia que frente a la sociedad demandada aparecen cotizaciones ininterrumpidas entre el 24 de enero de 1989 y el 31 de enero de 2000, y desde esa fecha en adelante únicamente aparecen cotizaciones por junio de 2004, mayo de 2005, noviembre y diciembre de 2007, ya que el empleador no realizó en su totalidad las cotizaciones para pensión a las cuales estaba obligado. Que nunca fue informada por Colpensiones sobre la iniciación de proceso alguno por parte de la entidad frente a Grupo Eléctrico para el cobro de los aportes en pensión, por lo cual, la entidad faltó a su deber legal de perseguir el pago de los aportes que por un afiliado dejó de realizar su empleador.

Manifestó que en el año 2002, la Superintendencia de Sociedades aceptó la promoción del acuerdo de restructuración de Grupo Eléctrico

SA, proceso en el cual, en la determinación de los derechos de voto, se inscribió al ISS con la suma de \$8.144.810, lo que deja en evidencia que esta entidad contó con la oportunidad de participar en dicho trámite con el fin de garantizar el cobro de los aportes a pensión de los trabajadores afiliados a su entidad; que por medio del auto 610-001273 del 19 de agosto de 2008, la Superintendencia de Sociedades declaró la apertura del proceso de liquidación judicial de Grupo Eléctrico SA, y ordenó informar a los acreedores de la sociedad que presentaran sus créditos, y remitir copia de esta providencia al Ministerio de Protección Social. Que el 16 de octubre de 2008, la accionante presentó ante la Superintendencia la liquidación de su crédito en calidad de acreedora laboral por haber sido empleada de la sociedad demandada por valor de \$38.115.900, aportando la certificación de los extremos de la relación laboral expedida por el revisor fiscal de la sociedad demandada. Que por medio del auto 610-000755 del 17 de julio de 2009, la Superintendencia dicha aprobó el inventario valorado, calificación y graduación de créditos y derechos de voto, en el cual, no se relacionó al ISS como acreedor en dicho proceso de liquidación. Agregó que ante tal error, mediante escrito del 26 de agosto de 2009, solicitó a la Superintendencia de Sociedades que incluyeran a dicha entidad, porque de no hacerlo le causarían un perjuicio frente al cumplimiento de los requisitos mínimos para su pensión de vejez. En vista de que la Superintendencia no respondió, inició acción de tutela en su contra y del ISS con el fin de que le garantizaran sus derechos fundamentales al trabajo y a la seguridad social, acción que fue denegada, pero se anexan las respuestas de las entidades accionadas donde la superintendencia manifestó que mediante auto 610-000972 de 2009, se había absuelto la solicitud de incluir al ISS como acreedor en la liquidación judicial. Por medio del auto 610-001473 del 23 de agosto de 2011, la superintendencia confirmó el acuerdo de adjudicación y en el mismo, incluyó al ISS con el valor de \$8.144.810. Con lo anterior, queda demostrado que el ISS no fue diligente en el proceso de liquidación judicial de Grupo Eléctrico SA, al punto que el reconocimiento como acreedor en la adjudicación, fue el resultado de su intervención como interesada.

Expuso que cumple con los requisitos para ser beneficiaria del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y del Acto Legislativo 01 de 2005, además de los requisitos para obtener la pensión de vejez a partir del 14 de agosto de 2010, fecha en la cual cumplió 55 años; que por ello, el 5 de marzo de 2013, radicó solicitud de prestación económica de pensión de vejez, la que fue negada por Colpensiones mediante Resolución GNR 211699 del 21 de agosto de 2013, considerando que no cumplía con la densidad de semanas para acceder a la pensión.

Mencionó que en vista de que las semanas faltantes son las dejadas de cotizar por la sociedad demandada, y teniendo conocimiento de que la misma no había vendido los bienes para realizar los pagos, se presentaba constantemente a la Superintendencia para consultar acerca de la venta de los bienes de la empresa y a partir del año 2015, fecha en la cual el liquidador realizó una negociación, comenzó a consultar por el pago a Colpensiones con el fin de volver a realizar la reclamación de su pensión de vejez. La respuesta de la superintendencia frente al pago fue que la Colpensiones no se había presentado a reclamarlo, y por tal razón, el 24 de noviembre de 2016, se presentó solicitud de información ante Colpensiones para que el pago se hiciera efectivo, el que fue respondido por esta entidad el 24 de enero de 2017, informando los pasos que debía realizar para efectuar el pago, desconociendo si efectivamente se realizó. Sostuvo que Colpensiones ya estaba informado del pago y que el trámite que hacía falta correspondía al liquidador y a Colpensiones.

Y finalmente manifiesta que el 22 de noviembre de 2017, presentó nuevamente solicitud de pensión de vejez ante Colpensiones.

Contestaciones

Colpensiones

Afirmó que son ciertos los hechos relacionados con la fecha de nacimiento de la actora; la edad a la entrada en vigencia de la Ley 100

de 1993; la afiliación a Colpensiones en la fecha efectuada por el empleador; que la superintendencia aceptó el acuerdo de restructuración y de adjudicación del Grupo Eléctrico SA; que la actora presentó solicitudes de pensión de vejez ante Colpensiones y que se negó la prestación; que Colpensiones dio respuesta a la Superintendencia para realizar la liquidación del crédito.

Informó que no es cierto lo expuesto en cuanto a que el ISS faltó a sus deberes legales al cobro de aportes, ya que siempre ha actuado de buena fe; que la demandante cumpla con los requisitos para ser beneficiaria del régimen de transición y de la pensión de vejez. Y sobre los demás hechos manifestó que no le constan.

Se opuso y a las pretensiones y propuso como excepciones de fondo las que denominó inexistencia de la obligación de reconocer la pensión de vejez del demandante; ausencia de causa para pedir; inexistencia de la obligación de pagar intereses moratorios algunos y/o indexar las condenas; prescripción y compensación.

Grupo Eléctrico SA Liquidada

Afirmó que son ciertos los hechos relacionados con la promoción del acuerdo de restructuración de esta sociedad y la apertura del proceso de liquidación; el acuerdo de adjudicación donde se incluyó al ISS por \$8.144.810. Que no es cierto que la respuesta de la superintendencia frente del pago a Colpensiones fue que la entidad no se había presentado a reclamarlo, y sobre los demás hechos manifestó que no le constan.

En cuanto a las pretensiones formuladas contra Colpensiones relacionadas con la pensión de vejez, manifestó no oponerse y solo se opuso a las dirigidas en contra de la sociedad. Propuso las excepciones de caducidad de la acción para reclamar y el principio “nadie puede alegar en su favor su propia culpa”.

Sentencia de primera instancia

El Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia del 24 de junio de 2022, declaró que María Gladys Henao García, tuvo un vínculo laboral con la demandada Grupo Eléctrico SA, actualmente liquidada, entre el 22 de enero de 1986 y el 15 de septiembre de 2008; que Colpensiones debe contabilizar en la historia laboral de la demandante, las semanas laboradas y no cotizadas por la sociedad demandada por los siguientes periodos:

01 de febrero de 2000 al 31 de diciembre de 2003.

01 de enero al 31 de mayo de 2004 y de julio a diciembre de 2004.

01 de enero al 30 de abril de 2005 y de junio a diciembre de 2005.

01 de enero de 2006 al 15 de septiembre de 2008.

Condenó a Colpensiones a reconocer y pagar la pensión de vejez a la demandante a partir del 1.º de agosto de 2014, en cuantía de un SMMLV, y 14 mesadas anuales; el retroactivo pensional causado entre el 22 de noviembre de 2014 al 31 de mayo de 2022, que equivale a \$85.567.602, el que se indexará a la fecha pago y sobre la cual se autoriza el descuento de los aportes al sistema en salud con destino a la EPS donde se encuentre afiliada la demandante. Declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación de pagar intereses moratorios y la de prescripción respecto de las mesadas causadas con anterioridad a 22 de noviembre de 2014. Condenó en costas a Colpensiones.

Como argumentos de su decisión expuso que la demandante, como socia fundadora, puede ser empleada de su empresa, ya que la sociedad es un ente distinto a la persona natural. Sostuvo que con la certificación emanada del revisor fiscal, se demuestra la existencia de la relación laboral entre la sociedad y la accionante, de conformidad a los parámetros expuestos por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, y que los periodos en mora con el empleador Grupo Eléctrico SA, deben validarse ya que el ISS fue negligente dentro

del proceso de liquidación de la sociedad, y si bien se le adjudicaron unos bienes dentro del proceso concursal, no se establece respecto de qué trabajadores son ni los intervalos, por lo que de conformidad con la jurisprudencia, cuando se omite el pago de aportes por el empleador en pensiones y esto impide el acceso a las prestaciones, siendo además negligentes las AFP en el cobro de las mismas, éstas deben asumir las prestaciones, pues si el trabajador prestó el servicio y por ende, el deber del pago de las cotizaciones, este no debe asumir las consecuencias de la mora del empleador. Aclaró que en razón de que la sociedad demandada fue liquidada no es posible ordenar el pago de aportes en virtud de que el crédito fue reconocido y se pagó en el proceso de liquidación judicial tramitado ante la Superintendencia de Sociedades, el que ya concluyó.

Además, consideró que la demandante es beneficiaria del régimen de transición en razón de la edad y para conservarlo dedujo que tenía 965 semanas al 29 de junio de 2005; y validadas las semanas en mora, y teniendo en cuenta los tiempos de servicios prestados y no cotizados en el sector público, se concluye que la actora tenía un total de 1121 semanas de cotización al 14 de agosto de 2010, fecha de cumplimiento de los 55 años. Y toda vez que siguió cotizando hasta el año 2014, reconoce la prestación a partir del 1.º de agosto de 2014, fecha para la cual contaba con 1428 semanas, colmando los requisitos del Decreto 758 de 1990 para obtener la pensión de vejez. Por el fenómeno prescriptivo reconoció la prestación desde el 22 de noviembre de 2014.

Expuso que los intereses moratorios no son procedentes en los casos de la mora del empleador por lo que ordenó la indexación.

Apelación

Colpensiones

Solicitó que se revoque el numeral quinto de la sentencia en cuanto a la imposición de costas procesales pues al momento de la actora efectuar la reclamación administrativa, la misma no acreditaba en su

historia laboral las semanas suficientes para tener ser beneficiaria del régimen de transición ni para ser acreedora de la pensión de vejez, por tanto, Colpensiones no estaba obligada a reconocer y pagar una prestación económica ya que no había cumplido los requisitos legales.

Dijo que de conformidad con los artículos 15, 17, 22 y 23 de la Ley 100 de 1993, los que establecen que la obligación de afiliación y pago de las cotizaciones exclusivamente en el empleador quien deberá asumir las consecuencias de la omisión efectuada del pago del título actuarial, por lo cual las pretensiones principales estaban dirigidas en cabeza del Grupo Eléctrico SA. Además, Colpensiones era un tercero en la omisión en esos aportes, y fue convocado para que una vez definida la relación laboral, se restablezca el derecho de la demandante y se reconozca la pensión de vejez. En este sentido no se trata de una persona vencida en el proceso conforme el artículo 365 CGP, razón por la cual no es procedente condenar en costas.

Grupo Eléctrico SA Liquidada

Solicitó que se revoque íntegramente la sentencia proferida argumentando que se ha desconocido en la sentencia la prescripción para la reclamación de los derechos, ya que en la pretensión primera se solicita que se declare la existencia de la relación laboral, y la juez en la sentencia ha pasado por alto la prescripción establecida en materia laboral del término de 3 años para iniciar la acción correspondiente para el reconocimiento de una relación laboral y teniendo en cuenta el acta de reparto que obra en el expediente, la demandada fue radicada el 18 de diciembre de 2017, entonces no es jurídicamente viable que se solicite el reconocimiento de una relación laboral ocurrida entre el año 2000 y el año 2009.

También consideró que se desconoce la Ley 1116 de 2006, en el sentido que se indica que la actora solicitó el reconocimiento pensional por su seguridad social por un monto equivalente a \$120.000.000 y el reconocimiento finalmente fue de \$8.000.000. Aclara que el reconocimiento de derechos en la ley concursal, parte de la prueba

documental que exista como soporte del crédito. Si la demandante a bien hubiera tenido rentar todos los soportes de la seguridad social que se presentaron, se causaron y no se pagaron, que debidamente se hubieran contabilizado, efectivamente el reconocimiento del crédito hubiese ascendido a los \$120.000.000, que ella alega, pero le encontraron un reconocimiento por menos del 10% del crédito, significa que no tenía o no aportó los soportes documentales requeridos para probar este monto de acreencia, acreencia que tampoco fue debatida por la solicitante dentro del trámite concursal al no presentar ningún recurso de apelación u otro recurso frente al deficitario reconocimiento de la seguridad social o de los aportes dejados de pagar a la seguridad social, lo cual solo demuestra que ellos no reportaron a la señora María Gladys como trabajadora, tanto así que no reportaron esa relación y esos incumplimientos que ahora, 10 años más tarde viene a alegar en una abierta prescripción para no mostrarle a la Superintendencia de Sociedades que están incumpliendo con los pagos administrativos que deben cumplir mes a mes dentro de la etapa de reorganización. Si bien es cierto, los socios pueden ser empleadores de una empresa, también requieren configurar los elementos del artículo 23 del estatuto laboral y no se cumple el elemento que dice que se requiere una remuneración por la prestación del servicio, es ilógico pensar que uno puede ser subordinado de una empresa en la cual durante 8 años no recibe salario, y se pueda predicar de esa relación una subordinación, por lo que no puede ser una situación que avale la ley y que avale una sentencia como en este caso.

Alegatos

Colpensiones expuso que la demandante manifestó que laboró al servicio de Grupo Eléctrico SA desde el 22 de enero de 1986, hasta el 15 de septiembre de 2008, y que su empleador incurrió en mora en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en pensiones, para los periodos comprendidos entre 1.º de febrero de 2000 hasta el 15 de septiembre de 2008 y se resalta que dentro de estos periodos se realizaron cotizaciones interrumpidas por los ciclos de junio 2004 mayo de 2005 noviembre y diciembre de 2007.

Respecto al empleador Grupo Eléctrico SA no se evidencia afiliación y pago por los periodos reclamados por la demandante, razón por la cual es preciso resaltar que, sobre la obligatoriedad de las cotizaciones al Sistema General de Pensiones, en virtud de lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 en los artículos 15, 17, 22 y 23, los cuales establecen que la obligación de afiliación y pago de cotizaciones al Sistema de pensiones, radica exclusivamente en el empleador, quien deberá asumir las consecuencias de su omisión efectuando el pago del título actuarial.

Expresó que si bien, Colpensiones resultó vencida en el presente proceso, también se resalta que la parte actora al momento de realizar la reclamación administrativa ante la entidad que represento, no acreditaba en su historia laboral las semanas suficientes y necesarias para ser acreedora de la pensión de vejez por lo cual jurídicamente mi representada no estaba obligada y no podía reconocer y pagar una prestación económica a la demandante sin el lleno de los requisitos legales, teniendo en cuenta que al momento de presentar la solicitud para el reconocimiento de la pensión de vejez la demandante no era acreedora del régimen de transición y no contaba con las semanas exigidas por el Decreto 758 de 1990 para acceder a la prestación de reconocimiento y pago de la pensión solicitada.

Además, dijo que las pretensiones principales de la demanda y las consecuencias de la omisión de afiliación recaen en Grupo Eléctrico SA, y que Colpensiones es un tercero ajeno en la omisión de esos aportes, por lo que fue convocado con el fin de que una vez, se defina esta relación laboral y que el empleador pague los portes a pensiones proceda a garantizar el restablecimiento del derecho y reconozca la pensión de vejez a la demandante, en esta sentido no se trata de una persona vencida en el proceso conforme lo establece el artículo 365 CGP, razón por la cual no es procedente condenarlo en costas, pues siempre ha actuado de buena fe.

CONSIDERACIONES

Previo al análisis del caso concreto, se advierte que se encuentra fuera del debate probatorio la fecha de nacimiento de María Gladys Henao García, el 14 de agosto de 1955; que el 5 de marzo de 2013 solicitó la pensión de vejez, la que fue negada por Colpensiones mediante Resolución GNR 211699 del 21 de agosto de 2013; y que nuevamente solicitó la prestación el 22 de noviembre de 2017. (PDF01 fl.83-86 y 91)

Con base en lo anterior, teniendo en cuenta lo expuesto por las demandadas en su apelación, y que la sentencia también será revisada en el grado jurisdiccional de consulta a favor de Colpensiones, los problemas jurídicos que debe resolver la sala son: (i). si operó la prescripción; (ii). si la actora es beneficiaria del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en caso afirmativo; (iii). si es procedente el reconocimiento de la pensión de vejez a la demandante bajo los parámetros del Decreto 758 de 1990, y en este ítem, determinar si es viable validar los tiempos en mora del empleador, y si se desconoce la Ley 1116 de 2006; (iv). determinar las condiciones de dicha prestación; (v). si procede la indexación; y (vi). las costas procesales.

i) Prescripción

Sostiene la sociedad demandada que el derecho al reconocimiento de una relación laboral, se encuentra prescrito, ya que la demanda fue radicada en 2017, y la relación laboral ocurrió entre los años 2000 y 2009, transcurriendo el término de 3 años establecido en materia laboral.

Al respecto, se tiene que los artículos 488 del CST y 151 del CPL, constituyen las reglas generales aplicables a la prescripción de las acciones que emanan de las leyes sociales, las que establecen:

Artículo 488. Regla General. Las acciones correspondientes a los derechos regulados en este código prescriben en tres (3) años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible, salvo en los casos de prescripciones especiales establecidas en el Código Procesal del Trabajo o en el presente estatuto.

Artículo 151. Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el empleador, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción pero sólo por un lapso igual.

Ahora, en los casos de pago de aportes al sistema de pensiones en mora o pago de cálculo actuarial, es necesario demostrar la existencia de la relación laboral para efectuar tal condena, pues jurisprudencialmente se ha establecido que *«el hecho generador de las cotizaciones al sistema pensional es la relación de trabajo»*, que desarrollada de manera efectiva en favor de un empleador *«causa o genera el deber de aportar al sistema pensional de los trabajadores afiliados al mismo»* (CSJ SL1922-2022).

Y en providencia CSJ SL514-2020, explicó:

«[...] en los términos del artículo 15 de la Ley 100 de 1993, la condición de cotizante está dada fundamentalmente por la vigencia de la relación laboral»; en la SL8082-2015, señaló que «los trabajadores subordinados causan la cotización con la prestación del servicio», y en la SL759-2018 sostuvo que la cotización al sistema de pensiones se origina con la actividad que como trabajador despliega el afiliado, de manera que los aportes son consecuencia inmediata de la prestación del servicio en cuyo pago y recaudo, tienen obligación empleadores y administradoras.»

Aunado a lo anterior, considera la Sala que en cuanto a la pretensión de la declaración de la existencia del contrato de trabajo cuando persigue exclusivamente el reconocimiento de prestaciones frente al sistema de seguridad social en pensiones, las que se fundan en los aportes efectuados a dicho sistema —y no el reconocimiento de acreencias laborales, ya que en este caso si se somete al término general de prescripción— se torna imprescriptible, tal como los derechos pensionales, ya que son un elemento fundamental de estos.

Frente a lo anterior, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha sostenido en su jurisprudencia en sentencia como la CSJ SL2680-2021, que:

El tema que expone el ataque, ya ha sido objeto de examen por la Sala de Casación Laboral, en distintas oportunidades en las que se dejó sentado que, en razón a que los aportes pensionales al sistema de seguridad social son un elemento constitutivo y fundamental del derecho a la pensión, los reclamos relacionados con la falta de afiliación al sistema de pensiones o la ausencia de pago de las cotizaciones, junto con las consecuencias derivadas de dichas omisiones, no están sometidos a la prescripción extintiva total y, por ende, se pueden reclamar en cualquier tiempo. Así se dejó claramente definido en la decisión CSJ SL738-2018 en la que indicó:

Si bien es cierto que, a partir de algunas de las anteriores decisiones, podría pensarse que el pago de los aportes pensionales omitidos, a través de cálculo actuarial, que es lo que en esencia se discute en este proceso, sí prescribe, pero teniendo en cuenta que la obligación se hace exigible a partir del momento en el que se reconoce la pensión de vejez o de jubilación, la Corte considera prudente precisar su doctrina, en cuanto a que, por tratarse de aportes pensionales, que constituyen capital indispensable para la consolidación y financiación de la prestación y, como consecuencia, están ligados de manera indisoluble con el estatus de pensionado, no pueden estar sometidos a prescripción. Así se consideró en la sentencia CSJ SL, 8 may. 2012, rad. 38266, que se refirió a la imprescriptibilidad de cálculos actuariales necesarios para financiar la pensión, o en la sentencia CSJ SL, 9 ag. 2006, rad. 27198, relacionada con la imprescriptibilidad de los bonos pensionales. En esta última decisión se anotó que,

[...] existe una relación indisoluble entre el bono pensional y el status de pensionado, debiendo correr la misma suerte la acción que se instaure en uno u otro caso para solicitar su reconocimiento, pues en puridad de verdad estos derechos están estrechamente ligados o entrelazados, y en estas condiciones ninguno de ellos admite prescripción extintiva del derecho en sí mismo.

Consideraciones que para la Sala resultan aplicables a la presente situación, pues el acopio de aportes pensionales omitidos por el empleador, sea cual sea la razón de ello, a través de cálculo actuarial, está ligado de forma lógica a la construcción del derecho pensional y a su financiación, de manera que, como se dijo en la sentencia CSJ SL795-2013,

[...] teniendo en cuenta ese ideal constructivo y contributivo, que orienta las pensiones de jubilación, lo más justo y adecuado a las normas y principios del sistema de seguridad social, es que el afiliado tenga la oportunidad de enmendar o perseguir la integración de todos aquellos elementos que contribuyen al nacimiento de su pensión, o de atacar todas las contrariedades que afecten ese derecho en construcción, en cualquier tiempo, de manera que cuando cumpla el último de los requisitos necesarios para tales efectos, pueda empezar a disfrutar de su descanso de una forma remunerada, equilibrada y digna.

A partir de todo lo anterior, se reitera, para la Corte las reclamaciones

por omisiones en la afiliación del trabajador al sistema de pensiones y sus consecuencias, en tanto están ligadas de manera necesaria tanto a la consolidación plena, como a la financiación debida de las respectivas prestaciones, no están sometidas al fenómeno de prescripción [...]. (Resaltado es del texto original y lo subrayado de la Sala).

Lo anterior permite a la Sala concluir que el Tribunal no incurrió en el error jurídico endilgado por la censura respecto de la figura de la prescripción, sin que se presentara desconocimiento a lo previsto en el artículo 151 del CPTSS, en tanto dicha disposición establece la prescripción de la acción, pero tres años a partir del momento en que la obligación se hace exigible, condición que tratándose del pago de aportes que constituyen el capital indispensable para la consolidación y financiación de la prestación pensional, no tiene cabida tal fenómeno extintivo, en la medida que conforme al criterio jurisprudencial que se acaba de reseñar, esta clase de reclamación es imprescriptible y, por tanto, se puede invocar en cualquier tiempo.

Se observa, además, que en los casos de reliquidación de pensiones por factores salariales, la misma corporación ha indicado que son imprescriptibles en cuanto la seguridad es un derecho irrenunciable, argumentos que si bien se tienen para el factor salario, considera esta sala que son aplicables a la declaratoria de la relación laboral, ya que de esta se deriva como se indicó, el pago de los aportes y un eventual derecho pensional, el que no puede verse truncado por el paso del tiempo al tratarse de derechos de raigambre constitucional, al efecto, la sentencia CSJ SL1571-2021, expuso:

«En similar sentido, se profirió sentencia CSJ SL15795-2017, en acción que también se adelantó por la entidad pública encargada del pago de la pensión de jubilación, tendientes a modificar el acto administrativo que reconoció ese derecho prestacional, y donde se analizó el tema de la imprescriptibilidad de la reliquidación de esa prestación por factores salariales, fallo que se fundó en parte, en la rectificación que esta Sala hiciera en la providencia CSJ SL8544-2016 y reiterada recientemente en la CSJ SL4077-2020, última que dejó por sentado que:

[...] la postura adoptada por la Corte en relación con la prescriptibilidad de la reliquidación de la base económica de la pensión, expresada en la mentada sentencia del 15 de julio de 2003, rad. 19557, y reiterada en muchedumbre de fallos, fue revisada y rectificada por la mayoría de la Sala en sentencia SL8544 de 15 de junio de 2016, rad. 45050, en los siguientes términos:

[...] la existencia de renovados y sólidos argumentos en contra del criterio vertido en la sentencia CSJ SL, 15 jul. 2003, rad. 19557, y en favor de la tesis de la imprescriptibilidad del derecho al reajuste pensional por inclusión de nuevos factores salariales, imponen hoy a la Sala la rectificación de la postura jurisprudencial atrás reseñada.

Para ese propósito, es conveniente empezar por recordar que, de

acuerdo con el art. 48 de la C.P., la seguridad social es un derecho subjetivo de carácter irrenunciable. Esto quiere decir que, en tanto derecho subjetivo, es exigible judicialmente ante las personas o entidades obligadas a su satisfacción y, en cuanto irrenunciable, es un derecho que no puede ser parcial o totalmente objeto de dimisión o disposición por su titular, como tampoco puede ser abolido por el paso del tiempo o por imposición de las autoridades.

Ahora bien, la exigibilidad judicial de la seguridad social y, en específico, del derecho a la pensión, que se desprende de su carácter de derecho inalienable, implica no solo la posibilidad de ser justiciado en todo tiempo, sino también el derecho a obtener su entera satisfacción, es decir, a que el reconocimiento del derecho se haga de forma íntegra o completa.

En efecto, el calificativo irrenunciable de la seguridad social no procura exclusivamente por el reconocimiento formal de las prestaciones fundamentales que ella comporta, sino que, desde un enfoque material, busca su satisfacción in toto, a fin de que los derechos y los intereses objeto de protección, sean reales, efectivos y practicables.

En este sentido, el derecho a la pensión se ve sustancialmente afectado cuando la prestación económica no es reconocida en su monto real y con todos los elementos que la integran; si además se tiene en cuenta que una pensión deficitaria no cumple su propósito de garantizar una renta vitalicia digna y proporcional al salario que el trabajador devengó cuando tenía su capacidad laboral inalterada.

Por esto, la seguridad social y los derechos subjetivos fundamentales que de ella emanan, habilita a sus titulares a requerir en cualquier momento a las entidades obligadas a su satisfacción, a fin de que liquiden correctamente y reajusten las prestaciones a las cifras reales, de modo que cumplan los objetivos que legal y constitucionalmente deben tener en un Estado social de Derecho.

Aunque podría sostenerse que al prescribir los derechos crediticios que emanan de las relaciones de trabajo, éstos desaparecen del mundo jurídico y, por ello, no pueden ser tenidos en cuenta para otros efectos legales, incluidos los pensionales; tal tesis presenta el serio inconveniente de no distinguir y ofrecer un tratamiento particular a dos cuestiones que son bien diferentes: (i) el salario como retribución directa del servicio en el marco de una relación de trabajo, y (ii) el salario como elemento o factor establecido por la ley para la liquidación de las pensiones.

En la primera hipótesis, es claro que el salario constituye un derecho crediticio sujeto a las reglas generales de prescripción previstas en los arts. 151 del C.P.T., 488 del C.S.T. y 41 del D. 3135/1968; en la segunda, el salario se redimensiona y adquiere otra calidad, pues deja de ser un derecho patrimonial y se convierte en un elemento jurídico esencial de la pensión.

Naturalmente, esta reconsideración del salario como elemento jurídico consustancial de la pensión, apareja su imprescriptibilidad, pues ya deja de ser un referente aislado para integrarse en la estructura de la prestación pensional y formar con ella un todo indisoluble.

Por lo demás, esta visión del salario y su papel en la consolidación de la pensión, empalma perfectamente con el pensamiento de la Sala en

el sentido que los elementos consustanciales a la prestación pensional no prescriben y, por este motivo, pueden ser revisados judicialmente en cualquier momento. Así, se ha dicho jurisprudencialmente que aspectos tales como el porcentaje de la pensión, los topes máximos pensionales, los linderos temporales para determinar el IBL y la actualización de la pensión, no se extinguen por el paso del tiempo, pues constituyen aspectos ínsitos al derecho pensional (CSJ SL, 19 may. 2005, rad. 23120; CSJ SL, 5 dic. 2006, rad. 28552; CSJ SL, 22 ene. 2013, rad. 40993; CSJ SL6154-2015).

En este orden de cosas, debe entenderse que así como no son susceptibles de desaparecer por prescripción extintiva esas cuestiones innatas de la pensión, tampoco deben serlo los factores salariales, pues tanto unos como otros son elementos estructurales y definitorios de la prestación, por manera que, en la actualidad no existe un principio de razón suficiente para seguir sosteniendo la prescriptibilidad del reajuste por inclusión de nuevos factores salariales.

Adicional a esta crítica y a la consideración de la imprescriptibilidad de la acción de revisión pensional por inclusión de factores salariales, esgrimida con apego en el carácter inalienable del derecho fundamental a la pensión, salen en defensa de la tesis que hoy acoge la Sala, los siguientes argumentos:

(1º) La jurisprudencia de la Corte, desde hace muchos años, ha asegurado que la pensión genera un arquetípico estado jurídico en las personas: el de jubilado o pensionado, que da derecho a percibir de por vida, una suma mensual de dinero. En esa línea, no puede ser objeto de prescripción, dado que este fenómeno afecta los derechos, más no los estados jurídicos de los sujetos...»

Por lo anterior, considera esta sala que no le asiste razón a la apoderada de la parte demanda en cuanto a que la declaratoria de la relación laboral siga el término general de prescripción como implícitamente lo indicó la juez de instancia al declarar no prósperas las excepciones de mérito propuestas por Grupo Eléctrico SA, por lo que se confirma la sentencia en este sentido.

(ii) Régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993

El régimen de transición es una prerrogativa creada por el legislador para aquellas personas que tenían la expectativa de adquirir su derecho pensional con los requisitos establecidos en una disposición anterior, ante el surgimiento de una nueva norma. Tal es el caso del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que dispuso que quienes para el 1.º de abril de 1994, contaran con más de 35 años, en el caso de las mujeres, y más de 40 para los hombres, o 15 años o más de servicios para todos,

tendrían acceso a la pensión mediante las reglas establecidas en el régimen anterior al cual estuvieran afiliados. En todo caso, según dicho postulado normativo, se respetan del régimen anterior, exclusivamente, las condiciones relacionadas con la edad, el tiempo de servicios o el número de semanas cotizadas y el monto pensional.

Este régimen de transición fue limitado hasta el 31 de julio de 2010, por el Acto Legislativo 01 de 2005, que reformó el artículo 48 de la Constitución Política. Esta transición se extendió hasta el 31 de diciembre de 2014, para quienes, siendo beneficiarios del mismo, tuvieran cotizadas más de 750 semanas al 29 de julio de 2005, fecha entrada en vigencia de la reforma constitucional.

Antes de la Ley 100 de 1993, regían entre otros, el régimen de servidores públicos dispuesto en la Ley 33 de 1985, que exigía un tiempo de servicio público de mínimo 20 años y 55 años de edad. Para los afiliados a cajas del sector público y/o el Instituto de Seguros Sociales (ISS), el artículo 7° de la Ley 71 de 1988 exigía un mínimo de 20 años de aportes a las distintas cajas, y 60 años de edad para hombres, 55 años para mujeres.

En el caso de las personas afiliadas al ISS, el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990, exigía un mínimo de 500 semanas cotizadas en los últimos 20 años anteriores a la edad para pensionarse, o 1000 semanas en cualquier época, además de contar con 60 años para hombre y 55 años para mujeres.

Ahora, para estudiar el derecho pretendido por la actora, se observa que el juez de conocimiento declaró acertadamente que la misma es beneficiaria del citado régimen en razón a que para el 1° de abril de 1993, contaba con 37 años de edad, ya que nació el 14 de agosto de 1955.

(iii) Pensión de vejez – Decreto 758 de 1990

Como se indicó, para los afiliados al ISS, el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990 en el artículo 12, trae los requisitos para acceder a la pensión de vejez, estableciendo un mínimo de 500 semanas cotizadas en los últimos 20 años anteriores a la edad para pensionarse, o 1000 semanas en cualquier época, exigencia que va de la mano con la necesidad de alcanzar 60 años de edad para hombre y 55 años para mujeres.

Ahora, conforme con el precedente jurisprudencial contenido, entre otras, en las sentencias CC T090-2009, CC T181-211, CCT193-2013 y CC SU769-2014, es posible la sumatoria de tiempos públicos sin cotización con aportes realizados al ISS hoy Colpensiones para efectos de aplicar el Decreto 758 de 1990, desarrollo acogido por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia desde la sentencia CSJ SL1947-2020, en la que sustentó su nuevo criterio en que la Ley 100 de 1993 prevé diversos instrumentos de financiación de las pensiones, como: bonos, cálculos actuariales o cuotas partes, que permiten contabilizar todos los tiempos servidos y cotizados para efectos del reconocimiento de las prestaciones económicas, sin distinción alguna y dado que las pensiones de transición se causan en su vigencia, es procedente su computo sin distinción del origen; postura que acoge esta sala.

De la historia laboral, aportada con la contestación por Colpensiones (Carpeta denominada HL y expediente administrativo... 02 Historia Laboral), se observa que la demandante se afilió al ISS el 24 de enero de 1989, lo que confirma que se le aplicaba el régimen propio de dicha entidad con antelación a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. En cuanto al requisito de edad, se conoce que cumplió 55 años el 14 de agosto de 2010.

En lo que respecta a la densidad de semanas, se observa dentro de la historia laboral que la actora cotizó **712,14** semanas con diferentes empleadores del sector privado, y prestó sus servicios por **115,43**

semanas en el sector público sin cotización al ISS, estableciendo para esos tiempos un total de **827,57** semanas.

Ahora, dentro de la prueba documental aportada con la demanda se encuentra la Resolución GNR 211699 del 21 de agosto de 2013 (PDF01 fl.83-86) a través de la cual el ISS le niega la pensión de vejez a la actora, en razón de que no cumple con la densidad de semanas requeridas. Y teniendo en cuenta que la actora afirma que durante la relación laboral entre ella y Grupo Eléctrico SA, se pagaron las cotizaciones de manera incompleta, se analizarán dichas inconsistencias.

Para lo anterior, es de vital importancia resaltar que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha adoctrinado como criterio jurisprudencial desde el año 2008, (Radicación 34270 del 22 de julio de 2008) que el afiliado que tenga la condición de trabajador subordinado causa la cotización con la prestación efectiva del servicio, y si el empleador no cumple la obligación de pago oportuno y la administradora de pensiones no adelanta las acciones pertinentes para obtener el recaudo de los aportes en mora, es a ella a quien corresponde asumir el reconocimiento de la pensión que se genere para el asegurado o los beneficiarios. Esta postura ha sido reiterada, entre otras, en las decisiones CSJ SL2436-2023, CSJ SL3807-2020, CSJ SL5058-2020 y CSJ SL5081-2020, CSJ SL3023-2019, CSJ SL3112-2019, entre otras.

En la providencia CSJ SL2436-2023, además de reiterar lo anterior, se insiste en que debe probarse la existencia de la relación laboral a efectos de validar los periodos en mora:

Conforme a lo señalado, es dable colegir, que cuando existen periodos en mora por parte de algún empleador, le corresponde a la entidad de seguridad social ejercer las acciones de cobro y si no lo hace, esa inactividad no puede perjudicar los derechos del trabajador, por ende, deben ser contabilizados para efectos pensionales, siempre que se demuestre la existencia de vínculo contractual con el trabajador y la efectiva prestación del servicio por parte de éste, que es lo que da lugar al pago de aportes.

En otros términos, no puede el juez entrar a convalidar ciclos con una aparente mora patronal, sin tener la certeza de que en estos el demandante

tuvo un vínculo laboral puesto que la omisión del empleador en reportar la novedad de retiro, no puede conllevar de manera automática e inexorable tener como efectivamente trabajados esos meses; de allí que es necesario, se insiste, que hayan pruebas razonables sobre la existencia de un vínculo laboral subordinado, esto es, que los períodos que se reclaman al empleador deben tener sustento en una relación de trabajo real.»

Por su parte, en la CSJ SL1982-2023 que reiteró la CSJ SL1691-2019, se anotó: *«Esta Sala ha explicado que para convalidar los ciclos en los que no se efectuó pago de las cotizaciones, resulta esencial acreditar la existencia de un vínculo laboral, ello, por cuanto para los trabajadores dependiente afiliados, los aportes se generan a partir de la efectiva prestación del servicio, con independencia de que se presente mora del empleador en su pago»* (ver también CSJ SL2402-2023 y CSJ SL200-2021).

De los fundamentos jurisprudenciales expuestos, se concluye que una vez probado el vínculo laboral y por ende la obligación de realizar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral por parte del empleador, es a cargo de las AFP, en quienes se encuentra subrogado el empleador para responder por las contingencias propias del sistema, y, por lo tanto, tienen la obligación de asumir las prestaciones económicas a que haya lugar, a pesar de la mora de los empleadores, pues son las llamadas a gestionar la satisfacción de los créditos que se generan a favor del sistema de seguridad social.

De lo anterior, también es pertinente indicar que no es de recibo lo expuesto por la demandada en su recurso al indicar que se vulneraron los lineamientos de la Ley 1116 de 2006, y que el reconocimiento de derechos en la ley concursal, parte de la prueba documental que exista como soporte del crédito, y que si la demandante hubiera allegado todos los soportes de la seguridad social que se causaron y no se pagaron, efectivamente el reconocimiento del crédito dentro del proceso hubiese sido más alto, sin embargo como se expuso, la responsabilidad del cobro coactivo de los aportes a seguridad social en el presente caso, correspondía a Colpensiones, no a la accionante, a través de las acciones de cobro coactivo o bien, dentro del proceso de liquidación, por tanto, debe asumir las consecuencias de su actuar negligente al no ejecutar al empleador para obtener los aportes.

En el asunto en estudio, la actora, para demostrar la existencia de la relación laboral aporta el contrato individual de trabajo a término indefinido que obra a folio 13, a partir del 22 de enero de 1986, el que no se encuentra suscrito, por lo que no es dable darle validez. También se encuentra a folio 14, una certificación del revisor fiscal de la sociedad, suscrita por el revisor fiscal, donde consta que la actora laboró para Grupo Eléctrico SA, desde el 22 de enero de 1986 hasta el 15 de septiembre de 2008, afirmando que desde febrero de 2000 no se le pagaron aportes al seguro social.

Respecto a las certificaciones laborales, es pacífica la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, respecto de que su contenido ha de tenerse como cierto, posición que sigue esta colegiatura, como se expone en sentencias como la CSJ SL3201-2023, donde indica que:

«Sobre el valor probatorio de los certificados laborales, en sentencia CSJ SL, 8 mar. 1996, rad. 8360, reiterada en CSJ SL, 23 sept. 2009, rad. 36748, CSJ SL, 24 ago. 2010, rad. 34393, CSJ SL, 30 abr. 2013, rad. 38666, señaló:

"El juez laboral debe tener como un hecho cierto el contenido de lo que se exprese en cualquier constancia que expida el empleador sobre temas relacionados con el contrato de trabajo, ya sea, como en este caso, sobre el tiempo de servicios y el salario, o sobre otro tema, pues no es usual que una persona falte a la verdad y dé razón documental de la existencia de aspectos tan importantes que comprometen su responsabilidad patrimonial o que el juez cohoneste este tipo de conductas eventualmente fraudulentas. Por esa razón, la carga de probar en contra de lo que certifique el propio empleador corre por su cuenta y debe ser de tal contundencia que no deje sombra de duda, de manera que, para destruir el hecho admitido documentalmente, el juez debiera acentuar el rigor de su juicio valorativo de la prueba en contrario y no atenerse a la referencia genérica que haga cualquier testigo sobre constancias falsas de tiempo de servicios y salario o sobre cualquier otro tema de la relación laboral"»

Sobre este tema, la apoderada del Liquidador de Grupo Eléctrico SA, expuso en su apelación que de conformidad con artículo 23 del estatuto laboral, en este caso, no se cumple con la remuneración por la prestación del servicio, ya que es ilógico pensar que uno puede ser subordinado de una empresa en la cual durante 8 años no recibe salario, sin embargo, este enfoque que no planteó al momento de fijarse

el litigio, y además, ésta sola afirmación no desvirtúa la existencia del contrato de trabajo.

Así las cosas y de conformidad con los parámetros jurisprudenciales expuestos, considera este cuerpo colegiado que es posible validar los periodos comprendidos entre el 1.º de febrero de 2000 al 15 de septiembre de 2008, salvo los ciclos correspondientes a junio de 2004, mayo de 2005, y noviembre y diciembre de 2007, los que se registran de manera completa en la historia laboral, semanas validadas que ascienden a **437,14** semanas, endilgando las consecuencias del no cobro de dichos aportes completos a Colpensiones, ya que a juicio de la sala, obra en el expediente prueba idónea que dé lugar a la declaratoria judicial que se pretende.

De conformidad con lo anterior, se establece que la demandante conservó el régimen de transición ya que 29 de julio de 2005, contaba con 969 semanas; que laboró un total de **1264,71** semanas en toda su vida laboral, de las cuales **1130** fueron al 31 de julio de 2010, por lo tanto, tiene derecho al reconocimiento de la pensión de vejez consagrada en el Decreto 758 de 1990, aplicable en transición, como determinó el juez de instancia. Cabe resaltar que por haberse causado su pensión con anterioridad al 31 de julio de 2010, a la demandante no le es exigible lo señalado en el parágrafo 4.º del Acto Legislativo 01 de 2005, tal como indicó el juez de conocimiento.

(iv) Condiciones de la prestación de vejez

El juez determinó que la mesada pensional de la actora asciende a un SMLMV, y realizadas las cuentas por esta sala, se observa que le asiste razón ya que la mayoría de sus cotizaciones se efectuaron teniendo como base el salario mínimo para cada año, al que al aplicarle una tasa de remplazo del 87%, según el artículo 20 del Decreto 758 de 1990 por contar con más de 1200 semanas cotizadas, arroja un valor inferior al SMLMV, y por disposición del artículo 35 de la Ley 100 de 1993 ninguna pensión puede ser inferior a dicho monto. Además, dispuso de manera correcta, el pago de dos mesadas adicionales al año, por

haberse causado la pensión con anterioridad al 31 de julio de 2011, de conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005.

Ahora, revisada la excepción de prescripción formulada oportunamente por la demandada, advierte la sala que la pensión de vejez se solicitó el 5 de marzo de 2013, conforme la Resolución GNR 211699 del 21 de agosto de 2013, la que fue negada, sin embargo, continuó efectuando cotizaciones, sin que se alegue que fue por error del ISS que continuó aportando, a lo que se suma que este punto se revisa en virtud del grado de consulta, por tanto, no es dable analizar este tema. Se agrega que nuevamente solicitó la prestación el 22 de noviembre de 2017, sin que se haya resuelto esta solicitud, y la demanda se presentó el 18 de diciembre de 2017, (no el 17 de septiembre de 2018 como indica la juez) ante la Oficina Judicial de Medellín como se observa en el PDF01ActaDemandaAnexos fl.1, por lo que de conformidad con el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, esta excepción esta llamada a prosperar parcialmente, y la prestación económica se reconocerá a partir del 22 de noviembre de 2014, como acertadamente lo indicó la juez de instancia.

En vista de lo expuesto, aun cuando se considera que los parámetros expuestos por la a quo para la liquidación del retroactivo pensional son correctos, se procede a actualizar el valor correspondiente al momento en que se emite esta decisión.

AÑO	VALOR MESADA	DÍAS POR AÑO	SUBTOTAL AÑO
2014	\$616,000	69	\$1,416,800
2015	\$644,350	420	\$9,020,900
2016	\$689,455	420	\$9,652,370
2017	\$737,717	420	\$10,328,038
2018	\$781,242	420	\$10,937,388
2019	\$828,116	420	\$11,593,624
2020	\$877,803	420	\$12,289,242
2021	\$908,526	420	\$12,719,364
2022	\$1,000,000	420	\$14,000,000
2023	\$1,160,000	420	\$16,240,000
2024	\$1,300,000	30	\$1,300,000
		TOTAL	\$109,497,726

En consecuencia, se cuantifica el retroactivo pensional entre el 22 de noviembre de 2014 y el 31 de enero de 2024 en la suma de \$109.497.726. Además, se ordenará que a partir del 1.º de febrero de 2024 se continúe cancelando una mesada pensional de \$1.300.000, es decir, equivalente al salario mínimo legal mensual vigente, sin perjuicio de los incrementos a que haya lugar.

(v) Indexación de las condenas

Ha de indicarse en primer lugar, que los intereses de mora del artículo 141 de la Ley 100 de 1990, son conexos al reconocimiento de la pensión de vejez, y es procedente en tanto Colpensiones ha tardado en reconocer y pagar mesadas pensionales a la demandante por más de 4 meses, plazo que otorga el artículo 9º de la Ley 797 de 2003, para la decisión de la prestación económica.

En el presente proceso, la juez de instancia absolvió de esta pretensión, y condenó a la indexación argumentando que existe un fundamento para negar la prestación en sede administrativa que es la mora patronal como lo establece la Sala de Casación Laboral, en providencia CSJ SL1681-2020, sentencia que se revisa por esta sala, observando que si bien habla del tema de los intereses moratorios, la misma concluye que estos deben aplicarse a los todos pensionados bajo el régimen de transición, y no se refiere a la exoneración del pago de los mismos, como si lo indica la sentencia CSJ SL1921-2023, donde estableció que:

Sin embargo, es cierto que se ha previsto una serie de eventos en los que se exceptúa de los mismos, pues su proceder no se puede calificar de arbitrario o caprichoso, como cuando: i) se actúa en acatamiento de la disposición legal aplicable, sin poder prever futuros análisis o cambio de criterio jurisprudencial (CSJ SL3087-2014, CSJ SL16390- 2015, CSJ SL2941-2016 y CSJ SL984-2019); ii) existe conflictos entre posibles beneficiarios o titulares de la prestación, que deben ser atendidos por la jurisdicción ordinaria (CSJ SL1399-2018y CSJ SL4599-2019); iii) se trata de pensiones convencionales (CSJ SL16949-2017) y, iv) el cambio de jurisprudencia.

Además, en sentencia CSJ SL1642-2023, la citada Corporación sostuvo:

“...Ahora, esta Sala también ha dicho que, por vía de excepción, las administradoras de pensiones se exoneran del pago de los intereses

moratorios, cuando quiera que se produce alguna de las siguientes situaciones: i) la administradora de pensiones niega el derecho con apego minucioso a la ley vigente aplicable al caso concreto; ii) cuando el reconocimiento de la prestación obedece a un cambio de criterio jurisprudencial que obviamente dicha entidad no podría prever para la época en que le fue presentada la solicitud prestacional; o iii) cuando la administradora niega la prestación pensional por existir disputa entre sus posibles beneficiarios (CSJ SL787-2013, rad. 43602; SL10504-2014, rad. 46826, SL10637-2015, rad. 43396 y SL1399-2018, rad. 45779), situaciones que no son predicables en el presente asunto, dadas las circunstancias fácticas y fundamentos jurídicos que lo rodearon.”.

De lo anterior, se concluye que en el presente caso, la solicitud de pensión fue realizada por segunda vez el 22 de noviembre de 2017, por lo que correspondería liquidar los intereses de mora a partir del 23 marzo de 2018, ya que es claro para esta sala que la AFP Colpensiones incurrió en mora en el pago de las mesadas pensionales adeudadas a la demandante de manera injustificada, debido a que no se demuestra que se haya incurrido en alguna de las causales de exoneración descritas en la jurisprudencia citada, pues la mora en el pago de aportes pensionales por el empleador no se enmarca en las premisas para exonerar a la sociedad del pago de intereses de mora.

Sin embargo, en este punto no es posible modificar esta condena de manera desfavorable a Colpensiones en virtud del grado jurisdiccional de consulta, debiendo confirmarse la sentencia en este punto.

(vi) Costas procesales.

Sea lo primero advertir que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso, *«la liquidación de las expensas y el monto de las agencias en derecho sólo podrán controvertirse mediante los recursos de reposición y apelación contra el auto que apruebe la liquidación de costas»*.

Precisado lo anterior, encuentra la Sala que la petición elevada por la entidad recurrente no tiene vocación de prosperidad, por cuanto el numeral 1.º del artículo 365 del CGP, igualmente aplicable a los juicios laborales por remisión expresa del 145 del CPTSS, prevé la condena en costas *«para la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva*

desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto»

En gran cantidad de providencias se ha dejado claro que nuestra ley procesal ha consagrado en esta materia el criterio objetivo, es decir, que las costas corren en todo caso a cargo del vencido en juicio, sin que sea admisible tener en consideración la conducta asumida por las partes dentro del mismo, es decir, sin considerar si se actuó o no de buena fe, ya que solo basta con el hecho de haber resultado vencido para que se imponga tal condena. En el presente caso, Colpensiones presentó oposición a las súplicas de la demanda y finalmente las pretensiones de la demandante salieron adelante, y la entidad tiene la obligación de reconocer la prestación económica solicitada. Por tales motivos, la sentencia también será confirmada en este punto.

En conclusión, considera la sala que la sentencia que se revisa por vía de apelación merece ser confirmada.

Las costas procesales de la primera instancia quedan como lo indicó el juez. Las de la esta instancia, atendiendo a lo establecido en el numeral 1° del artículo 365 del CGP, y por no salir adelante la apelación formulada por las demandadas Colpensiones y Grupo Eléctrico SA, son de su cargo y en favor de la demandante. Sin embargo, no se efectuará condena a Grupo Eléctrico SA, por encontrarse liquidada. De conformidad con lo establecido en el acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016 proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, como agencias en derecho en esta instancia se fija la suma de \$1.160.000.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Segunda de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: MODIFICAR el numeral 3.º de la sentencia proferida por la Juez Veinticuatro Laboral del Circuito de Medellín, 24 de junio de 2022, en el proceso instaurado por María Gladys Henao García en contra de Colpensiones, el cual quedará de la siguiente manera:

TERCERO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, a reconocer la pensión de vejez a la señora **MARIA GLADYS HENAO GARCIA** a partir del **1 de agosto de 2014**, en cuantía de 1 SMMLV, en proporción de **14 mesadas anuales** según se expuso en la parte motiva de esta providencia.

El valor del retroactivo pensional causado entre el **22 de noviembre de 2014 al 31 de enero de 2024**, equivale a la suma de \$109.497.726 que se pagará indexada a la fecha pago, y sobre la cual se autoriza el descuento de los aportes al sistema en salud con destino a la EPS donde se encuentre afiliada la demandante.

SEGUNDO: Confirmar la providencia de primera instancia en lo demás.

TERCERO: Condenar en costas a Colpensiones a favor de la demandante. Se fijan como agencias en derecho en esta instancia se fija la suma de \$1.160.000.

Se notifica lo resuelto por EDICTO. De no ser susceptible del recurso extraordinario de casación, se ordena devolver el expediente al juzgado de origen.

Los magistrados,

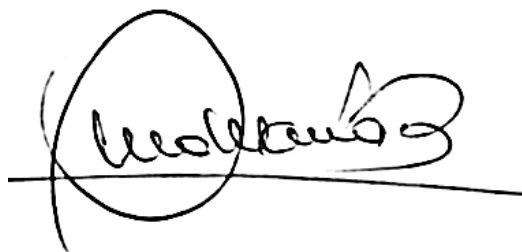


JUAN DAVID GUERRA TRESPALACIOS



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA

Rdo. 05-001-31-05-010-2017-01029-01
175-22

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'A' and 'M' that are interconnected. The signature is written over a horizontal line.

ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ